



Proceso	Ejecutivo hipotecario
Demandante	Bancolombia S.A.
Demandado	Sergio Alejandro Londoño Sepúlveda
Radicado	No. 05129 31 03 001 2018 00024 01
Instancia	Segunda
Interlocutorio	No. 192
Procedencia	Juzgado Civil del Circuito de Caldas
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Resuelve recurso de apelación
Tema	Nulidad
Subtemas	Las nulidades procesales. Nulidad por indebida notificación. Notificación por aviso.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), trece de diciembre de dos mil veintiuno

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto del 24 de junio de la presente anualidad, proferido por el **JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALDAS (ANT.)**, por medio del cual no accedió a la nulidad solicitada, en el proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por **BANCOLOMBIA S.A.**, en contra de **SERGIO ALEJANDRO LONDOÑO SEPÚLVEDA**.

II. ANTECEDENTES

Hechos: Por auto del 16 de abril de 2018, se libró mandamiento de pago a favor de BANCOLOMBIA S.A., y en contra del señor Sergio Alejandro Londoño Sepúlveda y, se decretó el embargo y secuestro de los bienes inmuebles objeto del gravamen hipotecario; en escrito del 07 de mayo de 2018, la parte demandante allegó constancia y certificación expedida por SERVIENTREGA S.A., con resultados negativos de la citación enviada al demandado a la carrera 50 No. 137Sur-55, apartamento 415, torre 5, Conjunto Residencial Cerrado Camino Real P.H., del Municipio de Caldas y dando cuenta que la persona a notificar no reside ni labora allí; seguidamente y por escrito del 28 de los mismos mes y año, aportó constancia expedida por la empresa de correo, que da cuenta que la citación remitida al ejecutado a la carrera 29ª No. 8Sur-65, apartamento 901, Edificio Ryo de Medellín, fue recibida el 18 de mayo de 2018; en proveído del 29 mayo de 2018, se tuvo como válida la diligencia de citación para la notificación personal del extremo pasivo; autorizando a la ejecutante para que una vez venciera el término concedido, continuara con la notificación por aviso conforme con el Art. 292 del C.G.P., una vez efectuada la notificación por aviso del auto que libró mandamiento de pago, por auto del 30 de agosto de 2018, se ordenó seguir adelante con la ejecución y decretó la venta en pública subasta de los bienes inmuebles objeto de gravamen hipotecario.

La nulidad invocada: La parte demandada solicitó la nulidad por indebida notificación porque en la notificación realizada no

cumplió con lo previsto en el numeral 3º del art. 291 del C.G.P.; si bien el extremo activo indicó en la demanda dos direcciones donde el accionado recibiría notificaciones, no fueron aportadas en debida forma porque al momento de realizar la notificación a la segunda dirección que se suministró, carrera 29ª No. 8Sur-65 de Medellín, insertó apartamento 901, nombre del edificio Ryo y la ciudad; datos que no aportó en su momento al expediente y, no obstante, el Juzgado tiene en cuenta la comunicación remitida; evidenciándose la nulidad de lo actuado por indebida notificación conforme con el numeral 8º del art. 133 del C.G.P., en armonía con lo dispuesto por la jurisprudencia en tal sentido. Por estas razones, solicita la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto que libró mandamiento de pago.

Traslado parte demandante: Al descorrer el traslado la parte demandante adujo que efectivamente en la demanda se indicó como segunda dirección donde el ejecutado recibiría notificaciones carrera 29ª No. 8Sur-65 de Medellín, conforme lo informó éste al banco en la actualización de datos; no es cierto que al agregar en la citación el número del apartamento y el nombre del edificio, se está induciendo al Despacho en error y vulnerando el derecho al debido proceso del ejecutado; por el contrario, se estaba asegurando el derecho de defensa; téngase en cuenta que el Juzgado si tenía conocimiento de dicha dirección, toda vez, que la misma consta en la escritura pública y en el pagaré No. 5491584506429223; además, conforme la certificación expedida por SERVIENTREGA S.A., como el demandado efectivamente reside en esa dirección, el empleado de la

empresa postal procedió a hacer entrega tanto de la citación como del aviso; acorde con lo anterior, el trámite del proceso se encuadra dentro de los cánones y procedimientos legales y, como la notificación se surtió legalmente se profirió auto ordenando seguir adelante la ejecución; además, el ejecutado tenía pleno conocimiento de la existencia del proceso, incluso, se le invitó para que compareciera al juzgado a notificarse. Por estas razones, solicita que la petición de nulidad sea desestimada.

Decisión frente a la nulidad: Mediante auto del 24 de junio del presente año, se resolvió negativamente la solicitud de nulidad, y como fundamento para esta decisión indica que al contrario de lo señalado por el demandado al momento de realizarse la notificación se le garantizó el debido proceso, porque si bien se aduce que se aportaron dos direcciones y que no se menciona de manera clara y con exactitud en el acápite de notificaciones la segunda dirección; pues solo al momento de enviar la comunicación del aviso se inserta como apartamento el 901 y como nombre del edificio Roy, y ciudad, y que el Despacho la tuvo en cuenta para ordenar que se continuara con la notificación del Art. 292; lo cierto es que, tanto en la escritura de hipoteca y como en el pagaré visible a folios 51, aparecen dichos datos y por lo tanto es una notificación efectiva; existiría vulneración del derecho de defensa y contradicción si el sitio donde se remitieron las comunicaciones no hubiera sido certificado como real sitio de notificación o se considerara notificado al demandado en un lugar que no corresponde al mismo o conocido por el juez.

El recurso de reposición y apelación: La parte demandada interpuso el recurso de reposición y, en subsidio apelación, contra el proveído que negó la nulidad solicitada; como motivos de inconformidad, en síntesis, adujo que el Juzgado no puede de oficio tomar la decisión sobre la dirección o direcciones de notificación que tendrá en cuenta, pues solo puede considerar como tal la señalada en la demanda conforme el inciso 2º del numeral 3º del Art. 291 del C.G.P., incurriendo el Despacho en error por lo que la decisión debe ser revocada; tal como lo informa la a quo la dirección donde fueron remitidas las comunicaciones para la notificación al accionado no corresponden a las consignadas en la demanda, sino que constan en la escritura pública y en el pagaré allegados como anexo del libelo genitor; lo que conlleva una clara vulneración de lo previsto en el Art. 29 constitucional.

Resolución del recurso: Por auto del 13 de agosto del año que avanza, se desató desfavorablemente el recurso de reposición y, subsidiariamente se concedió el de alzada; el a quo como fundamento de tal decisión señala que la demandante envió la comunicación de citación y notificación personal debidamente cotejada y sellada, a la calle 29ª 8Sur-65, apartamento 901, edificio Ryo de la ciudad de Medellín, y si bien la misma no fue aportada en la demanda en forma precisa, sí corresponde al ejecutado, como así consta en los documentos adosados con la demanda, como la escritura pública No. 764 del 21 de mayo de 2013 y el pagaré No. 5491584506438223; sin que se pueda tener como una citación y notificación irregular o invalida, cuando se tuvo la certeza que el demandado residía o laboraba allí; garantizando el debido proceso así como el derecho de

defensa y contradicción; además, como la citación para que el demandado acudiera a notificarse fue efectivamente recibida, sin que éste acudiera al Despacho; el ejecutante quedaba habilitado para enviar el aviso de notificación como aconteció; lo que resulta acorde con lo preceptuado en los arts., 291 y 292 del C.G.P. y, por lo tanto, tal actuación reviste plena validez.

III. CONSIDERACIONES

La nulidad: La nulidad procesal es el “[...] estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido”¹, gobernada por parámetros tales como: especificidad, trascendencia, protección y convalidación².

Nuestro ordenamiento jurídico procesal tratando de implementar un sistema taxativo o específico de nulidades, enlistó en el artículo 133 del Código General del Proceso bajo el carácter de “**solamente**”, los defectos o vicios que pueden dar lugar a la declaratoria de nulidad de todo o parte del proceso³, al respecto la H. Corte Constitucional ha expresado “*La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez*

¹ MAURINO, Alberto Luis. Nulidades Procesales. Segunda edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, año 2001. Pág. 19.

² Sentencia del 4 de mayo de 2005, Exp: 10996, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

³ En las sentencias C-491 de 1995 y C-372 de 1997, la Corte Constitucional se pronunció sobre la taxatividad de las causales de nulidad procesal.

sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso.”

El disenso: De la notificación al encausado tenemos que la demanda indicó como direcciones, en las cuales recibiría notificaciones, la carrera 50 No. 137 A Sur-55, apartamento 412, torre 5, Conjunto Residencial cerrado Camino Real P.H., del municipio de Caldas, y carrera 29ª No. 8Sur-65 de Medellín; una vez librado el mandamiento de pago la pretensora intentó la notificación al ejecutado en la primera de las direcciones indicadas, comunicación que fue devuelta por la empresa de servicio postal porque la persona a notificar no vive ni labora allí; seguidamente, el extremo activo remitió el citatorio a la carrera 29ª No. 8Sur-65, apartamento 901, edificio Ryo de la ciudad de Medellín, allí fue recibido el 18 de mayo de 2018; procediendo el Juzgado por auto del 29 de los corrientes mes y año, a tener como válido el envío de la comunicación y autorizando a la parte actora para que una vez venciera el término concedido, continuara con la notificación por aviso en los términos del art. 292 del C.G.P., a lo que la parte actora procedió con resultados positivos; luego, el 30 de agosto de 2018, ordenó seguir adelante con la ejecución y se decretó la venta en pública subasta de los bienes inmuebles objeto de gravamen hipotecario.

Ahora, si bien es cierto como lo afirma el recurrente que la parte demandante al enviar la citación al demandado a la carrera 29ª No. 8Sur-65 de Medellín, agregó a dicha dirección el número del apartamento y el nombre del edificio, esto es, la remitió a la carrera 29ª No. 8Sur-65, apartamento 901,

edificio Ryo de la ciudad de Medellín; también lo es, que las comunicaciones para la notificación al demandado fueron remitidas efectivamente a la dirección señalada en la demanda, donde recibiría notificaciones, como lo prevé el inciso 1º del numeral 3º del art. 291 del C.G.P., toda vez, que la dirección no fue variada, cambiada o modificada por el extremo activo; pues de una parte, simplemente se agregó el nombre de la edificación que se encuentra en la tantas veces reseñada dirección, carrera 29ª No. 8Sur-65 de Medellín, lo que constituye un punto de referencia o una reseña; pero se itera, en nada altera o varía la dirección; lo mismo acontece, con la indicación del apartamento, ya que como viene de señalarse, no cabe duda que incluso con independencia de que se hubiere agregado el nombre de la edificación en las comunicaciones y el No. del apartamento, la dirección continuaba siendo la misma, y era allí donde el demandado recibiría notificaciones; simplemente se precisó el número de apartamento quizás para evitar confusiones; amén, que como lo advirtió la a quo, la dirección a la que se remitió tanto el citatorio como la notificación por aviso, fue suministrada por el ejecutado al suscribir la escritura pública No. 764 del 21 de mayo de 2013, otorgada en la Notaría Quince de Medellín, donde entre otros actos consta el gravamen hipotecario, y el pagaré No. 5491584506438223, documentos que obran en el proceso.

Aunado a lo anterior y conforme con las constancias expedidas por la empresa de servicio postal, las comunicaciones fueron recibidas en la carrera la carrera 29ª No. 8Sur-65, apartamento 901, edificio Ryo de la ciudad de Medellín, lo que no fue desvirtuado ni desconocido por el

extremo pasivo; amén que las personas que las recibieron fueron contundentes en afirmar que "*el destinatario reside o labora en la dirección indicada*", dando cabal cumplimiento a lo previsto en los artículos 291 y 292 del C.G.P.

Es más, si la dirección indicada en la demanda corresponde a una unidad inmobiliaria cerrada o una copropiedad con portería, es suficiente porque en este caso, la entrega se puede hacer exitosamente a quien atiende la portería o recepción, como expresamente lo prevé el inciso 3º del numeral 3º del art. 291 del C. General del Proceso, quien luego procede a entregar el correo o las encomiendas a quienes allí habitan o trabajan, sin que para ello sea necesario indicar el nombre de la unidad o edificio y el No. de apartamento u oficina, de quien allí reside. Se puntualiza, que lo que se busca con la indicación de la dirección correcta del demandado, es que éste reciba efectivamente las comunicaciones y notificaciones que se le remiten con ocasión de los procesos que tramita la jurisdicción y cuyo propósito, es enterarlo de la iniciación de ese proceso en su contra, para que se haga parte y defienda sus derechos, finalidad que se cumplió en este caso, como se ha venido precisando.

Conclusión: De conformidad con el anterior análisis, se confirmará el auto recurrido.

Se condenará al demandado a pagar las costas de segunda instancia a favor de la parte demandante. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fijará la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$908.526.00), que equivale a un (1) salario mínimo legal

mensual vigente (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,**

IV. RESUELVE:

- 1.** Por lo dicho en la parte considerativa, **CONFIRMAR** el auto proferido el 24 de junio de la presente anualidad.
- 2.** Se condena al demandado a pagar las costas de segunda instancia a favor de la parte demandante. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fijará la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$908.526.00), que equivale a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán por el a quo.
- 3.** Se ordena devolver el expediente a su lugar de origen, para que se imprima el trámite que legalmente corresponda.

NOTIFÍQUESE



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
MAGISTRADO